

estrategia trazada fue la de entregar el poder temporalmente a los militares con la participación del partido de gobierno mientras se apaciguaba el movimiento popular. Posteriormente se trazó la estrategia del Frente Nacional para alternar el poder entre los dos partidos tradicionales excluyendo a los nuevos movimientos de carácter popular por un período de dieciséis años.

En razón al triunfo de la revolución cubana en el año de 1959, al auge de los movimientos comunistas y de izquierda, a la actitud de los partidos tradicionales, a partir del año de 1960 se inicia la guerra ideológica o revolucionaria la cual se había principiado a gestar en la misma etapa anterior cuando se presentó la penetración y organización de células en todos los sectores de la sociedad, cuando se organizaron los núcleos de resistencia campesina como Sumapaz, Yacopí, El Pato, El Guayabero, Riochiquito y Marquetalia. En la década del sesenta con el apoyo de Rusia, de Cuba y de China se organiza el movimiento prosoviético de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, los movimientos

# GUERRA & ESTRATEGIA DE PAZ

Por • Héctor José Corredor Cuervo

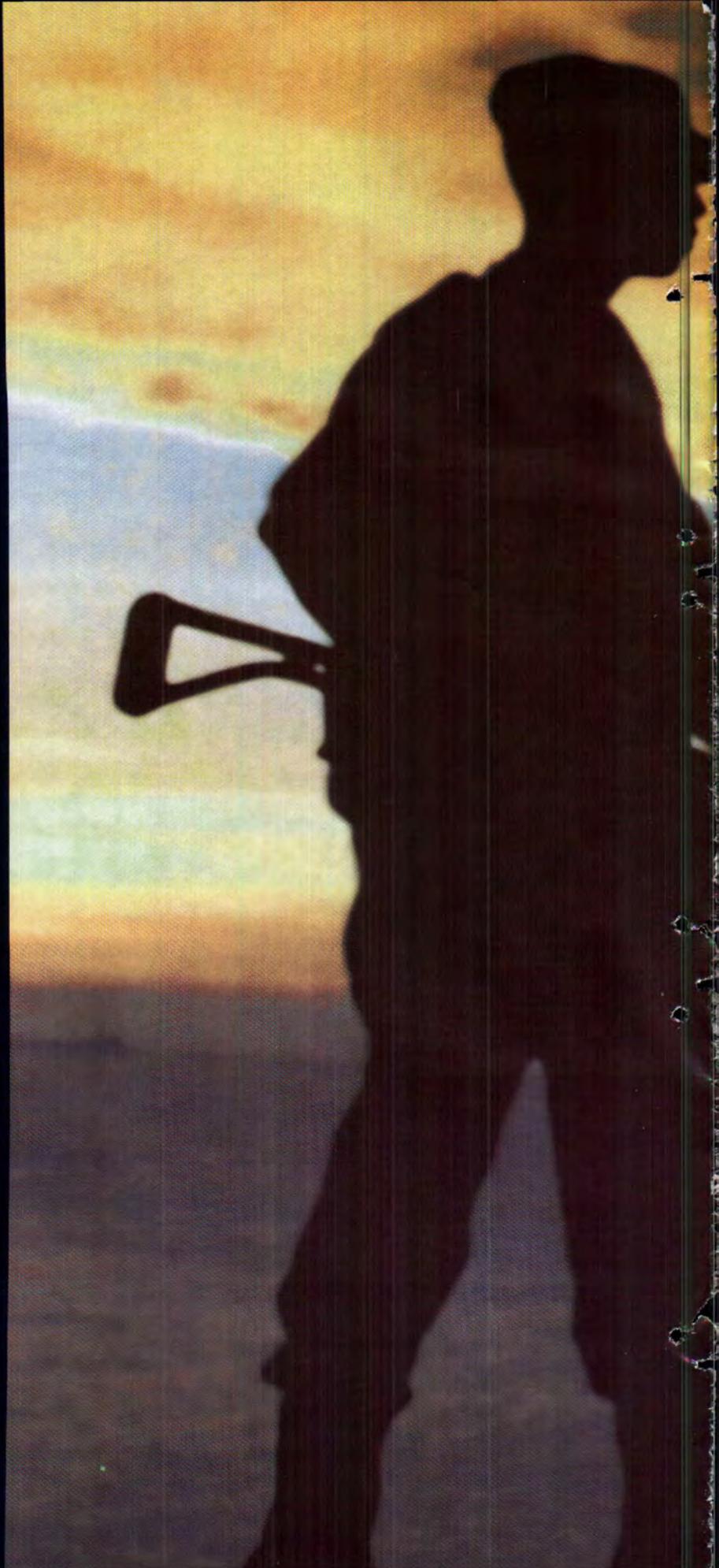
La guerra política o violencia (1930 – 1960), se inicia como revancha de la persecución política del tiempo de la hegemonía conservadora en el año de 1930 cuando asume el poder el partido liberal, la cual se agudiza con la pérdida del poder del partido en 1946, se generaliza con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán después del 9 de abril de 1948 y por el desconocimiento de nuevos partidos con origen popular como la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, y el Partido Comunista. En esta etapa la clase dominante a través de los partidos dirigen la guerra pero la conducción en el plano militar la hace el pueblo. Para conseguir la paz, la

procastristas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Comando Indigenista Revolucionario del Cauca, CRIC. El movimiento prochino del Ejército Popular de Liberación, EPL y posteriormente con apoyo de Cuba el M-19. Para lograr la paz y por haberse internacionalizado el conflicto, el Gobierno colombiano se trazó la estrategia de eliminar las causas de la insurgencia para lo cual acudió a los Estados Unidos para buscar apoyo en los programas de la Alianza para el Progreso la cual había sido diseñada para enfrentar la guerra fría ante la amenaza comunista creciente en los países latinoamericanos y ante la escasez de capitales internos.

Para tener un respaldo estatal y poder desembolsar los préstamos en apoyo de los programas que buscaban eliminar la inconformidad del pueblo, se diseñó una estrategia de creación de grandes institutos estatales de producción, de prestación de servicios, de asistencia técnica, de regulación comercial, de financiación de operaciones económicas privadas; esta política dio origen a la creación de organismos como: el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, el Instituto de Fomento Industrial, IFI, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, al apoyo del Instituto de Crédito Territorial, ICT, a la creación de otros establecimientos como Telecom y Ecopetrol los cuales a pesar de la gran burocracia que se generó permitió la eliminación parcial de las causas y el apoyo a la acción de las Fuerzas Armadas para cumplir con la estrategia de desarrollo de las regiones y represión de los grupos alzados en armas llegando a su total debilitamiento a finales de la década.

La guerra de la narcosubversión se inicia a mediados de la década de 1970 cuando se empieza a desarrollar este fenómeno mezclado con el contrabando y con la subversión; en este período el narcotráfico penetró todos los estamentos de la sociedad, la clase emergente tuvo un poder real en los campos económico, político y social. Debido al debilitamiento de la subversión en la década anterior, esta se fortaleció con los impuestos que cobraba a los dueños de los cultivos de marihuana y de la coca llamado "**gramaje**" y aprovechó la presencia de la gente flotante para incrementar sus efectivos y para generar más violencia e intimidar o exterminar a los colaboradores del Gobierno quedando a finales de la década regiones completas en manos de los grupos armados y narcotraficantes, generando el éxodo de gran cantidad de población a las ciudades donde luego se conformarán grandes cinturones de miseria que son aprovechados para organizar pandillas urbanas armadas y para generar movimientos de protesta por la incapacidad del Estado para hacer respetar los derechos naturales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad.

A finales de la década 1970 debido al triunfo de la revolución sandinista y a





los niveles de consumo tan altos, los Estados Unidos consideran la narcosubversión como una amenaza para su seguridad nacional, presiona a los países latinoamericanos para tomar medidas represivas y declara la guerra total contra la producción de los narcóticos. Por esta razón, en el año de 1979 el Presidente Julio César Turbay ante el aumento del poder de la guerrilla, instauró el Estatuto de Seguridad que permitió incluir en el mismo paquete la represión de los grupos armados y el tráfico de drogas, reduciendo significativamente los grupos subversivos especialmente el M-19 y una disminución del 80% en la producción de marihuana.

En el año de 1982 el gobierno de Belisario Betancur produce un cambio de actitud en el tratamiento del conflicto interno en contra de la política de los Estados Unidos de **limpiar la región de marxistas** y trazó la estrategia de negociar con la subversión para lograr la paz como lo había propuesto en su campaña y de liderar un grupo de cuatro países (Venezuela, México, Panamá y Colombia) para alcanzar la paz en Centroamérica trazando los objetivos militares y políticos que formaron parte del proceso de Contadora como los de: detener la carrera armamentista en todas sus formas, prohibir el establecimiento de bases militares extranjeras, reducir y eliminar la presencia de consejeros militares extranjeros y otras formas de acciones militares o de seguridad, prevenir al tráfico de armas, prevenir el uso de territorios propios para promover o apoyar actos de terrorismo, facilitar una política de limitaciones de armas y del tamaño de las Fuerzas Militares a los niveles necesarios para el mantenimiento de la defensa nacional y el orden público. Esta estrategia como lo demuestra la historia no logró los objetivos propuestos y sí permitió el incremento considerable de la narcosubversión en todo el territorio nacional.

Ante la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad, a principios de la década de 1980 se origina la guerra sucia que no es otra cosa que la continuación de la política por otros medios como son la penetración de los distintos organismos de Estado, el ataque a las Fuerzas Armadas para disminuir su capacidad, las campañas de difamación por actos que ellos mismos planearon y ejecutaron con la participación de algunas autoridades o elementos de la Fuerza Pública corruptos o equivocados.

La estrategia de negociación ha continuado con una ambivalencia entre el diálogo y la represión lográndose la entrega de algunas armas y la participación de los dirigentes de algunos movimientos en la vida política y en la Constituyente de 1991 para hacer los cambios que no han sido los adecuados para lograr la paz, como la proliferación de los derechos individuales y sociales sin contar con los recursos para atenderlos, la privatización o eliminación de los institutos y organismos creados en la década del sesenta para lograr el desarrollo del país, la internacionalización de la economía como si contáramos con una estruc-

tura económica rica, el reconocimiento institucional a la economía informal creyendo que los pequeños agentes de la producción y los varados contribuyen a la modernización industrial, la apertura económica que ha permitido el arrasamiento de nuestra industria y de nuestra agricultura.

Actualmente el proceso de negociación es la estrategia de la paz, todos los colombianos esperamos que tenga éxito si se abren espacios reales de participación de los movimientos populares, si se corrigen los errores del pasado, si se cuenta con la colaboración de todos los países que apoyaron y apoyan a los movimientos subversivos, con los países que producen los precursores y con los que consumen los narcóticos, con los dirigentes que no han permitido el desarrollo de otras alternativas, con los grandes monopolios que vienen acabando la pequeña y mediana industria, con los gremios que defiendan los intereses de sus organizaciones y no los intereses personales, con los sindicatos que han sido generadores de violencia, con la Iglesia Católica para que acepte la libertad de cultos y no despierte odios por mantener sus privilegios y en general con todos los colombianos.

Para quienes hemos dedicado gran parte de nuestra vida al estudio de la situación de inseguridad y a la solución de los conflictos internos nos queda un interrogante que será resuelto por la historia. ¿Será posible administrar un proceso de paz que busca incorporar a los grupos narcosubversivos que pretenden seguir con las armas en las regiones bajo su control, con una política internacional de represión, con un Estado en quiebra por el déficit fiscal y que ha eliminado organismos que prestaban servicios públicos o facilitaban la atención de los necesitados, con unas Fuerzas Armadas sin recursos, sin legislación apropiada y sin la capacidad de cubrir todo el territorio nacional, con una población civil manipulada por la economía subversiva y con algunos dirigentes que han sido financiados con los dineros calientes?

Que Dios salve la patria dándole las luces a sus dirigentes honestos para que entiendan el verdadero problema, para que no sigan politizando las Fuerzas Armadas y para que nos señalen el rumbo de la reconciliación y de la paz a todos los colombianos.